

Pronunciamiento de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

Estamos en crisis: el pasado desafía el futuro

En 1990, en Ginebra, el gobierno y el FMLN se comprometieron a negociar el final de la guerra, deteniendo el fuego, defendiendo los derechos humanos y democratizando El Salvador. Estos tres compromisos constituyen el fundamento de los acuerdos de paz, firmados dos años más tarde, en 1992. Su no cumplimiento, en vísperas de las elecciones generales de 1994, ha colocado al proceso salvadoreño en su crisis más grave.

Los “escuadrones de la muerte” y su actividad mortal dirigida en las últimas semanas contra los líderes y miembros del FMLN, las amenazas de muerte a los candidatos de la oposición, las bombas incendiarias, las manifestaciones callejeras, las amenazas de un lado y del otro, la irresponsabilidad gubernamental ante la violación del derecho a la vida de los ciudadanos y a la privacidad, todo ello concentrado en dos semanas, no sólo ha hecho presente de manera brutal un pasado que algunos pensaban superado, sino que también ha puesto al descubierto la gravedad de las demoras y de los incumplimientos de las disposiciones de los acuerdos, colocando al proceso de transición en su crisis más aguda.

1. El cese del fuego

El fin de la violencia no ha sido total, pues aunque se detuvo la guerra formal, los “escuadrones de la muerte” nunca fueron investigados ni desarticulados por el Estado salvadoreño y continuaron con la guerra sucia. Pareciera que los “escuadrones de la muerte” están dispuestos a diezmar al FMLN con el doble propósito de ajustar cuentas y restarle fuerza política. De esta manera, estos grupos siguen enlutando a

la familia salvadoreña y haciendo imposible la reconciliación.

Nada de esto estaría ocurriendo si el gobierno salvadoreño hubiese cumplido las recomendaciones de la Comisión de la verdad en cuanto a investigar los "escuadrones de la muerte", si el gobierno de Estados Unidos hubiese sido más diligente y dicho la verdad sobre su existencia en el momento oportuno, si ONUSAL hubiese sido más firme sin contemporar tanto con el gobierno sobre este asunto, si el FMLN no hubiese descuidado, al menos en público, el cumplimiento de los acuerdos y si la sociedad civil hubiese comprendido el alcance de los acuerdos y el papel que le corresponde.

La desmilitarización, que forma parte del final de la guerra, también ha sido parcial, porque si bien la Fuerza Armada ha reducido a la mitad sus efectivos y ha disuelto los cuerpos de seguridad, excepto la Policía Nacional, por otro lado, ha expandido y fortalecido su aparato militar y ha conservado su estructura de inteligencia. Asimismo, la Fuerza Armada aún no se ajusta a la nueva misión que le asigna la Constitución; por eso, tampoco acaba por replegarse a sus cuarteles y todavía la vemos patrullando y dedicada a acciones cívicas que no le corresponden con el aval del presidente de la república, su comandante en jefe. Al FMLN también le costó mucho entregar todas las armas.

2. La defensa de los derechos humanos

Este compromiso exige que el Estado cumpla rigurosamente el deber de garantizar la vida de los ciudadanos investigando el delito, administrando justicia y aplicando las sanciones establecidas por la ley. Pero la no investigación y la ineficiencia del sistema judicial es lo que sigue caracterizando al Estado actual. Para poner fin a la actividad de los "escuadrones de la muerte", a la del crimen organizado y a la delincuencia común es indispensable una investigación diligente.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil son instrumentos claves para garantizar el respeto de los derechos humanos. Por ello, las demoras en la formación y despliegue de la Policía Nacional Civil, la ausencia de un financiamiento adecuado por parte del gobierno y de la comunidad internacional, y la falta de apoyo por parte de un sector poderoso de la Fuerza Armada, han llevado a que los centros urbanos más importantes estén controlados por la Policía Nacional durante las elecciones y a que ésta no desaparezca hasta después de la toma de posesión del nuevo gobierno, lo cual permite la posibilidad de que un gobierno derechista encuentre la manera para conservarla. Sin embargo, ahí donde ya se ha desplegado, ha contado con el apoyo de la población, pues ha sabido ganarse su confianza.

2.1. Los “escuadrones de la muerte”

La existencia de estos grupos armados ilegales e impunes merece un tratamiento aparte no sólo por el papel desestabilizador y represivo que jugaron en el pasado, sino también por su vinculación, pasada y actual, a ciertos sectores de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional y por su determinación de dar al traste con el proceso de paz.

Al principio, sus crímenes fueron atribuidos a la delincuencia común. Pero pronto la derecha tuvo que buscar otras explicaciones para desviar la atención que inevitablemente se centraba en ella. Entonces, algunos de sus voceros relacionaron artificiosamente las denuncias del arzobispado con la existencia de los “escuadrones”, dando a entender que aquéllas dieron origen a éstos. Otro argumento especioso es que los asesinatos obedecen a una purga interna del FMLN, lo cual, nunca ha sido un patrón de su conducta y menos cuando ha optado clara y públicamente por la democracia y el pluralismo político. Por otro lado, recordemos que tanto el asesinato de Mons. Romero, como el de los jesuitas e incluso los secuestros fueron atribuidos al FMLN. En cambio, sí es procedente preguntarse por la relación que pudiera haber entre estos grupos y las pugnas en el interior de ARENA.

Al igual que en el pasado, algunos sectores militares descontentos se han vuelto a aliar con el sector más retrógado de la derecha para dar lo que pareciera ser la última batalla y detener el proceso de transición. Esos militares no aceptan el nuevo rol de la Fuerza Armada en una sociedad democrática y temen que si las fuerzas democráticas conquistan más espacio en el gobierno y en la asamblea legislativa se podrían alcanzar consensos para profundizar aún más las reformas militares.

El descontento de la derecha desestabilizadora pudiera provenir del desplazamiento económico al que ha sido sometida por la derecha financiera e industrializante. Los primeros han sido excluidos por los segundos de los beneficios de la política económica neoliberal y no estarían preparados para enfrentar las transformaciones inevitables de la integración centroamericana. De esta manera, el capital modernizante, representado por el círculo del presidente Cristiani, habría aprovechado las políticas económicas neoliberales para disminuir el poder económico de ese capital atrasado al mismo tiempo que se preparaba para entrar en la nueva fase integracionista. En este sentido, el control de la banca y del crédito es un instrumento vital para conseguir ambos objetivos. Esta derecha apoya los acuerdos, está de acuerdo en modernizar las estructuras del poder y, segura de sí misma, no le teme a la convivencia con el FMLN. En cambio, la derecha retrógrada se encuentra amenazada. Su posición tradicional de poder y privilegio se encuentra en grave peligro.

Ahora bien, como la fórmula electoral del partido gobernante no satisface a los descontentos ni les garantiza su posición, los militares y los capitalistas que no han podido entender las nuevas realidades, han renovado su antigua alianza para combatir abiertamente el proceso de transición por medio de los "escuadrones de la muerte". En el pasado, los utilizaron para aniquilar a sus enemigos políticos; en la actualidad, recurren a ellos para detener los cambios estructurales que la transición trae consigo.

2.2. Es necesario investigar

En lo que va de este año, según el seguimiento que el IDHUCA hace de la prensa escrita, se han registrado 357 asesinatos que no pueden ser atribuidos a la delincuencia común, sino que 304 son atribuidos a "desconocidos" y 53 a "escuadrones de la muerte". De acuerdo a la misma fuente, en los últimos meses se ha alcanzado el alarmante promedio de 114 asesinatos mensuales en total. Es decir, en El Salvador está muriendo más gente que en Haití e incluso que en Nicaragua.

Esta realidad exige un basta ya enérgico que no exime a nadie de su responsabilidad. Mientras no se ponga fin a esta violencia, es imposible pedir a la población que confíe en la institucionalidad del Estado. Por parte de éste, sin embargo, ha habido falta de voluntad política para investigar el delito, tal como lo muestra el haber trasladado a los miembros de los cuerpos de seguridad disueltos a la Policía Nacional junto con sus respectivos aparatos de inteligencia. El funcionamiento y la modernización del Estado penden de esa voluntad política que aún no existe.

Para combatir eficazmente a los "escuadrones de la muerte", la investigación no puede limitarse a los asesinatos de los dirigentes del FMLN, ni siquiera a los de sus miembros, sino que debe comprender todos los asesinatos cometidos después de la firma de los acuerdos que se atribuyen a "desconocidos" o directamente a los "escuadrones de la muerte". Asimismo, la investigación también tiene que abarcar la actividad de los "escuadrones" durante la guerra civil, tal como lo recomienda la Comisión de la verdad. No hay que olvidar que esta investigación tiene un doble propósito, esclarecer los asesinatos y exponer ante la opinión pública y la justicia a los miembros de estos grupos. Si se limita la investigación, puede ser que se esclarezcan algunos casos, pero es muy probable que no se rompa con el pasado, dejando al país atado por esos intereses poderosos y oscuros.

La verdad es fundamental para la transición democrática y para encontrarla ya existen algunas pistas en la versión completa del informe de la Comisión de la verdad dedicada a este tema, en la información que

tienen las agencias gubernamentales estadounidenses y en los testimonios de los ex miembros de los "escuadrones" que se encuentran guardando prisión en el país. Pese a ello, está por verse si una vez identificados los responsables, el gobierno será capaz de administrar justicia. En el caso de los jesuitas, cuyo cuarto aniversario estamos conmemorando, y en la mayoría de los otros casos investigados, el gobierno no se atrevió a ello, sino que optó por una amnistía inoportuna, inconstitucional y contraproducente. La experiencia ha demostrado que la amnistía no garantiza el respeto de los derechos humanos ni la estabilidad institucional del país.

La amnistía elimina la posibilidad de establecer la verdad jurídica, pero nunca podrá suprimir de la conciencia nacional la certeza moral, porque ella conoce lo sucedido y a sus responsables. Quizá jurídicamente no se pueda probar cargo alguno, pero la información que se va difundiendo confirma lo que ya se sabe. Mientras no sea enfrentado, el pasado seguirá desafiando al futuro.

3. La democratización

La democratización no puede reducirse al evento electoral. Los acuerdos de paz son más democráticos que las elecciones mismas. Si sus disposiciones hubiesen sido cumplidas, tal como estaba previsto, las elecciones podrían considerarse como su culminación. Pero en la situación actual de demoras e incumplimientos de algunas disposiciones importantes, con un tercio de la población excluida del registro electoral, con el terror provocado por la inseguridad generalizada y la actividad de los "escuadrones", es muy difícil poder hablar de unas elecciones libres y limpias.

Este sombrío cuadro no estaría completo si no añadiéramos que el gobierno actual deja más pobres y más pobreza que el anterior. Es cierto que el PIB ha crecido, pero ello no ha sido suficiente como para alcanzar la tasa de crecimiento demográfico. Por eso, la relación PIB-población se encuentra tal como estaba en la década de los sesenta. La distribución de la riqueza nacional sigue siendo tanto o más injusta que antes y así, a la muerte violenta y antes de tiempo, se agrega la muerte lenta de los empobrecidos.

La transferencia de tierras y los otros programas de reinserción no han funcionado tal como estaba acordado. El foro de concertación social no ha podido convertirse en una plataforma de concertación por la actitud antisindical del gobierno y de la empresa privada, por un lado, y por la debilidad del sector laboral, por el otro. Así, pues, los mínimos de la democracia no se han cumplido aún.

Haciendo "un corte de caja" en el proceso de paz a partir de la realidad y de la última comunicación del Secretario General al Consejo de Seguridad, el saldo es rojo. Rojo por las demoras, los incumplimientos y las dificultades, y rojo por la sangre que se sigue derramando criminalmente. De todo ello sólo se puede concluir que, en vísperas de la campaña electoral, el proceso está en crisis. El Salvador está en una situación crítica, pues aún campea la muerte violenta y la pobreza, y todo ello se encubre para evadir responsabilidades y no afrontar las soluciones verdaderas. Pareciera que el país está volviendo a tiempos supuestamente superados. El pasado sigue estando presente aún, cerrando posibilidades para la construcción de la democracia en el país.

En lo fundamental, la mentira y el encubrimiento de la realidad siguen. El país no ha aprendido las lecciones del pasado y el informe de la Comisión de la verdad todavía no ha generado las transformaciones estructurales esperadas. La inercia, el acomodo y el escepticismo han hecho que el encubrimiento haya sido más fácil. Pero también ha habido una especie de voluntad de autoengaño en ONUSAL y en la comunidad internacional. De esta manera, gobernantes, ciudadanos y comunidad internacional han tendido a soslayar lo que está ocurriendo realmente para no tener que preguntarse por su responsabilidad y para no constatar que el camino emprendido no lleva a la solución de los problemas fundamentales del pueblo salvadoreño.

4. Se puede vivir de otra manera

En esta conmemoración de los mártires del pueblo salvadoreño y de los de la UCA conviene recordar que las partes que suscribieron los acuerdos así como el pueblo en su conjunto tenían deseos de poner fin a la guerra y de construir una sociedad muy distinta a la anterior —al menos en el papel, por lo que toca al gobierno. Esto significa que el gobierno está comprometido a romper definitivamente con el pasado y a establecer las bases para una sociedad más justa, el FMLN a poner a producir el potencial concientizador y humanizante de los acuerdos y el pueblo a exigir a ambos el cumplimiento cabal y completo del compromiso adquirido. Sólo así se podrá pasar de la negociación a la reconciliación.

Hay que hacer producir lo mejor de la tradición salvadoreña, especialmente el aporte de sus mártires. Ellos vivieron y dieron su vida para que todos sepamos, en definitiva, que "se puede vivir de otra manera". En un país como el nuestro, una sociedad civil y democrática nueva sólo tiene futuro cuando está asegurada básicamente la vida para todos los salvadoreños, pero en especial para las mayorías populares. Proclamar que se quiere la libertad, la justicia y el amor es un engaño, sino se

ponen las bases y condiciones para que sean realidad.

La sangre martirial derramada que conmemoramos este día infunde un espíritu de lucha nuevo y una esperanza también nueva. Es cierto que aún estamos lejos de la sociedad que queremos, pero seguimos siendo un pueblo con esperanza. Lo peor que pudiera ocurrirnos es que desapareciera o que nos hicieran olvidar o que nos robaran lo mejor que hemos generado en estos últimos veinte años: nuestra esperanza y nuestra utopía. Los mártires han dado testimonio ejemplar de ello con su muerte, pero sobre todo con su vida. Muchos de ellos murieron en continuidad con su vida, enseñándonos que se puede vivir de otra manera.

El Salvador necesita gentes con esperanza, con verdad, con creatividad y comprometidos. Necesita líderes como Monseñor Romero y el padre Ellacuría y necesita gente buena y entregada como la innumerable nube de mártires y testigos. Todo ello lo tenemos en El Salvador. Por eso, si olvidamos a los mártires seremos ingratos con ellos, crueles con los pobres e insensatos con nosotros mismos. La reconciliación de la familia salvadoreña pasa necesariamente por el reconocimiento de sus mártires.

Junta de Directores.

San Salvador, 16 de noviembre de 1993.

En el Cuarto aniversario de los mártires de la UCA.

